



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:  
PROPOSICIONES DE LEY

15 de diciembre de 2023

Núm. 39-1

Pág. 1

### PROPOSICIÓN DE LEY

**122/000025** Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cese inmediato en todas sus funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial una vez finalizado su mandato.

**Presentada por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.**

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cese inmediato en todas sus funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial una vez finalizado su mandato.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2023.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Josep Maria Cervera i Pinart, diputado del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en el Pleno de esta Cámara, una Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cese inmediato en todas sus funciones de los miembros del Consejo General de Poder Judicial una vez finalizado su mandato.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2023.—**Josep Maria Cervera Pinart**, Diputado.—**Míriam Nogueras i Camero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya.

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 570 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA EL CESE INMEDIATO EN TODAS SUS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL UNA VEZ FINALIZADO SU MANDATO

Exposición de motivos

I

El actual bloqueo en la renovación de diversos órganos constitucionales debe ser afrontado con responsabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho como principio constitucional fundamental, que incluye, a su vez, el principio de la división de poderes.

El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debido a diversos factores (entre los cuales la alteración del escenario político y la desaparición del bipartidismo, el corporativismo en la judicatura y la politización de la justicia —con su correlato lógico, la judicialización de la política—) es un caso evidente de fracaso institucional.

La falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos del Estado, sumada a la inefectividad de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que mediante la introducción en la Ley Orgánica del Poder Judicial de un nuevo artículo 570 bis restringía las facultades atribuidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones para forzar su renovación, ha generado una situación de interinidad extraordinariamente crítica, que pone en evidencia la falta del más mínimo sentido de responsabilidad democrática de los actores implicados y supone una vulneración no ya del espíritu, sino de la literalidad misma de las previsiones constitucionales.

II

La instrumentalización política del Poder Judicial y de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, ha comportado que determinados conflictos, que deberían haberse debatido y resuelto en ámbitos políticos, se hayan trasladado tanto a los órganos judiciales como al órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial.

Una muestra de esta instrumentalización es precisamente el bloqueo en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato ha terminado. Este bloqueo ha reforzado la división del órgano en bloques ideológicos y a su vez ha sido aprovechado por el bloque dominante para perpetuar la actual relación de poder en el seno del órgano y también para dar curso a un indebido activismo político.

En efecto, el bloqueo no sólo ha intensificado males endémicos de la Justicia española como el corporativismo y la patrimonialización de la Justicia por parte de determinadas opciones ideológicas. También ha impulsado un salto cualitativo inédito en cualquier régimen democrático constitucional como es la intervención de este órgano en funciones en asuntos políticos que no son de su competencia.

El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace cinco años, y que por tanto carece de toda legitimidad democrática, no sólo ha continuado ejerciendo sus competencias, marcando el rumbo de la administración de justicia cuando ya no le correspondía, sino que ha desplegado una agenda política propia, poniendo en cuestión la actuación de otros poderes del Estado.

Ni el Poder Judicial ni su órgano de gobierno están llamados, de acuerdo con su configuración constitucional, a intervenir en cuestiones políticas —lo que se ha venido en llamar la judicialización de la política—, como tampoco deben perder su imparcialidad e independencia para devenir campo de batalla de los partidos y de los poderes políticos —lo que se ha venido a llamar la politización de la justicia, correlato del anterior—.

En un Estado plenamente democrático, las contiendas políticas deben dilucidarse mediante el debate ideológico que periódicamente se confronta en las urnas. Por tanto,

poner fin a la situación actual, en la que el Poder Judicial y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, interfieren en la vida política como un actor más (o incluso como un actor determinante), es un imperativo democrático.

Esta situación se ha concretado en la organización en bloques ideológicos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para conseguir sus objetivos políticos, interfiriendo indebidamente en las actividades y competencias de otros órganos constitucionales, como son las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos, que tienen legitimación democrática directa, vulnerando el principio de la soberanía nacional y el principio de la división de poderes, lo que constituye una verdadera subversión del orden constitucional.

La regulación vigente, que permite la continuidad indefinida de los miembros del órgano en funciones y posibilita que se impida su renovación de acuerdo con las nuevas mayorías parlamentarias, ha agudizado su politización y puesto en evidencia la nula capacidad de sus miembros para autorrestringirse ante las iniciativas, propias o emanadas de los partidos políticos o de otros poderes políticos del Estado, que conllevan descender a la arena política.

El olvido de las responsabilidades de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a tal extremo que incluso se han organizado reuniones de vocales con una determinada adscripción ideológica para coordinarse y desobedecer los mandatos legales, por ejemplo, obstruyendo o ralentizando el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional de forma que no se respeten los plazos previstos en la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La apelación de este sector a la insumisión a la Ley con el argumento de la independencia judicial demuestra un desprecio absoluto hacia el imperio de la Ley y el principio constitucional de la división de poderes. En un país democrático, que los miembros del órgano de gobierno de los jueces llamen a la desobediencia de la Ley —la máxima expresión de la democracia, materializada por las mayorías parlamentarias es inaceptable, especialmente teniendo en cuenta que la legitimidad de los jueces se fundamenta exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley.

Finalmente, cabe recordar que la situación de bloqueo no solo afecta a la calidad democrática de las instituciones del Estado, sino también, muy particularmente, a la legitimidad de quienes ostentan los cargos no renovados más allá de la caducidad de sus respectivos mandatos, transformándose en poderes autónomos cuyas resoluciones adolecen de la falta de legitimidad de los que las acuerdan.

### III

Toda situación de bloqueo genera una serie de problemas que afectan a la calidad democrática del funcionamiento de los poderes del Estado, pero estos problemas son especialmente graves cuando el órgano objeto del bloqueo es el Consejo General del Poder Judicial, tanto por su naturaleza de órgano de gobierno de los jueces como por las funciones que tiene constitucionalmente asignadas. El gobierno de los jueces, cuando se encuentra en funciones por haberse superado el plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación de sus miembros, no puede continuar igual que el que actúa en período de normal funcionamiento. Urge por tanto el establecimiento de un régimen específico para el Consejo General del Poder Judicial en funciones, de forma que se impida que tal situación pueda prolongarse en el tiempo.

El establecimiento de un régimen específico para la situación de interinidad es coherente con la naturaleza constitucional del Consejo General del Poder Judicial, puesto que ni es el Poder Judicial ni es un órgano perteneciente al Poder Judicial, sino una institución que la Constitución optó por establecer como una garantía más para reforzar la independencia e imparcialidad de los jueces, a la que atribuyó determinadas competencias para que estas no sean ejercidas por el Gobierno, sin que esto implique que los jueces dispongan de ningún tipo de autogobierno político. Según afirma el Tribunal Constitucional

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

al respecto del artículo 122 de la Constitución, «lo único que resulta de esta regulación es que ha querido crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción para el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que de ello se derive que este órgano sea expresión del autogobierno de los jueces» (STC 108, 1986).

De acuerdo con su naturaleza y con las funciones que le atribuye la Constitución («...en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario», artículo 122.2, pero también en relación con la designación de dos miembros del Tribunal Constitucional, artículo 159.1), al Consejo General del Poder Judicial en funciones, huérfano de la legitimidad democrática que ostenta en período normal, no le puede ser de aplicación el mismo régimen jurídico.

#### IV

La Constitución española establece, en su artículo 122.3, la duración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, en el apartado 2 del mismo artículo hace una remisión expresa a una Ley Orgánica para la regulación de su estatuto, el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Es, por tanto, en el marco de una Ley Orgánica, en este caso la ya existente Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, donde han de estar reguladas las consecuencias de la finalización del mandato de sus miembros que, por imperativo constitucional, no puede prorrogarse más allá de los 5 años establecidos en el artículo 122.3 de la Constitución.

Esta situación ya fue abordada en la reformas de derivadas de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, y de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, que introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial un nuevo artículo 570 bis con el propósito de restringir las facultades relativas a nombramientos atribuidas con carácter general al Consejo General del Poder Judicial, una vez que finaliza el plazo para su renovación sin que hayan podido ser designados los nuevos Vocales.

No obstante, la simple limitación de las facultades del Consejo General del Poder Judicial intentada con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2021, no sólo ha resultado insuficiente para revertir la situación de bloqueo, sino que incluso se ha demostrado contraproducente, como dejó patente la aprobación, en un ejercicio de discutible coherencia legislativa, de la Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, que excepcionaba la anterior permitiendo la designación por el órgano en funciones de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde por imperativo constitucional.

Ninguna de estas reformas se ha demostrado eficaz para atajar la situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, se hace necesario abordar medidas de mayor calado que, sin afectar a la independencia judicial ni a la autonomía de dicho órgano constitucional, permitan dar respuesta a una prolongada situación de bloqueo, con todas las consecuencias que ello conlleva. En este sentido, es importante recordar que la independencia judicial se ejercita individualmente por cada juez y tribunal en su actividad jurisdiccional. Es por tanto un poder, una facultad y una obligación individual, de la cual no deriva ningún poder o facultad ni para el Poder Judicial ni para su órgano de Gobierno.

De acuerdo con lo anterior, para desincentivar el mantenimiento del bloqueo a la renovación y forzar la salida de la situación de extraordinaria interinidad en que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, procede prever el cese inmediato en todas sus funciones de todos sus miembros si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales cuya designación le corresponda, siempre que haya finalizado el mandato de cinco años establecido en el artículo 122.3 de la Constitución. Las

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 39-1

15 de diciembre de 2023

Pág. 5

prerrogativas inherentes de los miembros del Consejo dejaran de ser de aplicación a los miembros cesados.

Mientras no sean elegidos los nuevos miembros, las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras deberán ser desempeñadas por tres de los miembros salientes, que en ningún caso podrán proponer nombramiento alguno, ser oídos por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ni tampoco elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan.

El establecimiento de un régimen específico para la situación de interinidad que conlleva el cese de los miembros caducados y que limita sus funciones a las estrictamente administrativas y disciplinarias es coherente con la naturaleza constitucional del Consejo General del Poder Judicial: un órgano no perteneciente al Poder Judicial cuya razón de ser es, en definitiva, asumir unas determinadas competencias que, no pudiendo ser ejercidas por los propios órganos judiciales, de ser ejercidas por el Gobierno la independencia e imparcialidad de los jueces podría verse enturbiada, sin que esto implique que los jueces dispongan de ningún tipo de autogobierno en sentido político.

### Proposición de Ley

Artículo uno. *Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.*

Se modifica el artículo 570, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 570.

1. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial no hubiere alguna de las Cámaras procedido aún a la elección de los Vocales cuya designación le corresponda, y cuando haya finalizado el mandato de cinco años establecido en el artículo 122.3 de la Constitución todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial cesarán inmediatamente en todas sus funciones.

2. Cesados que sean de sus funciones, dejarán de ser de aplicación todas las prerrogativas inherentes al cargo de miembro del Consejo General del Poder Judicial, incluía la percepción de la retribución prevista en el artículo 584 bis.

3. Mientras no sean elegidos los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras atribuidas al mismo serán desempeñadas por tres de los miembros salientes, que serán el de mayor y menor edad, así como aquel que se haya incorporado en último lugar.

4. Desde el momento en que finaliza el mandato de cinco años y hasta que hayan asumido su cargo los nuevos miembros, el Consejo General del Poder Judicial, formado interinamente por los tres miembros establecidos conforme al sistema previsto en el apartado anterior, no podrá proponer nombramiento alguno, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ni tampoco elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan.»

Artículo dos. *Derogación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.*

Queda derogado el artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 39-1

15 de diciembre de 2023

Pág. 6

A la Mesa del Congrés dels Diputats

Josep Maria Cervera Pinart, diputat del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, a l'empara del que estableix a l'article 124 i seg, del Reglament de la Cambra, presenta, pel seu debat en el Ple d'aquesta Cambra, una Proposició de Llei Orgànica de modificació de l'article 570 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial, per al cessament immediat en totes les seves funcions dels membres del Consell General de Poder Judicial una vegada finalitzat el seu mandat.

Palacio del Congrés dels Diputats, 7 de desembre de 2023.—**Josep Maria Cervera Pinart**, Diputat.—**Miriam Nogueras i Camero**, Portaveu del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 570 DE LA LLEI ORGÀNICA 6/1985, DE 1 DE JULIOL, DEL PODER JUDICIAL, PER AL CESSAMENT IMMEDIAT EN TOTES LES SEVES FUNCIONS DELS MEMBRES DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL UNA VEGADA FINALITZAT EL SEU MANDAT.

Exposició de motius

### I

L'actual bloqueig en la renovació de diversos òrgans constitucionals ha de ser afrontat amb responsabilitat democràtica i respecte a l'Estat de Dret com a principi constitucional fonamental, que inclou, alhora, el principi de la divisió de poders.

El bloqueig en la renovació del Consell General del Poder Judicial, a causa de diversos factors (entre els quals l'alteració de l'escenari polític i la desaparició del bipartidisme, el corporativisme a la judicatura i la politització de la justícia —amb el seu correlat lògic, la judicialització de la política—) és un cas evident de fracàs institucional.

La manca d'acord entre els dos principals partits polítics de l'Estat, sumada a la infectivitat de la Llei Orgànica 4/2021, de 29 de març, que mitjançant la introducció a la Llei Orgànica del Poder Judicial d'un nou article 570 bis restringia les facultats atribuïdes al Consell General del Poder Judicial en funcions per forçar-ne la renovació, ha generat una situació d'interinitat extraordinàriament crítica, que posa en evidència la manca del més mínim sentit de responsabilitat democràtica dels actors implicats i suposa una vulneració no ja de l'esperit, sinó de la mateixa literalitat de les previsions constitucionals.

### II

La instrumentalització política del Poder Judicial i del seu òrgan de govern, el Consell General del Poder Judicial, ha comportat que determinats conflictes, que s'haurien d'haver debatut i resolt en àmbits polítics, s'hagin traslladat tant als òrgans judicials com a l'òrgan de govern del Poder Judicial, el Consell General del Poder Judicial.

Una mostra d'aquesta instrumentalització és precisament el bloqueig en el nomenament dels membres del Consell General del Poder Judicial el mandat del qual ha acabat. Aquest bloqueig ha reforçat la divisió de l'òrgan en blocs ideològics i alhora ha estat aprofitat pel bloc dominant per perpetuar l'actual relació de poder al si de l'òrgan i també per donar curs a un activisme polític indegut.

En efecte, el bloqueig no només ha intensificat mals endèmics de la Justícia espanyola com ara el corporativisme i la patrimonialització de la Justícia per part de determinades opcions ideològiques. També ha impulsat un salt qualitatiu inèdit en qualsevol règim democràtic constitucional com és la intervenció d'aquest òrgan en funcions en assumptes polítics que no són de la seva competència.

El Consell General del Poder Judicial, en funcions des de fa cinc anys, per tant mancat de legitimitat democràtica, no només ha continuat exercint les seves competències,



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 39-1

15 de diciembre de 2023

Pág. 7

marcant el rumb de l'administració de justícia quan ja no li corresponia, sinó que ha desplegat una agenda política pròpia, posant en qüestió l'actuació d'altres poders de l'Estat.

Ni el Poder Judicial ni el seu òrgan de govern estan cridats, d'acord amb la seva configuració constitucional, a intervenir en qüestions polítiques —el que s'ha anomenat la judicialització de la política—, com tampoc han de perdre la seva imparcialitat i independència per esdevenir camp de batalla dels partits i dels poders polítics —el que s'ha anomenat la politització de la justícia, correlat de l'anterior—.

En un Estat plenament democràtic, les conteses polítiques s'han de dilucidar mitjançant el debat ideològic que periòdicament es confronta a les urnes. Per tant, posar fi a la situació actual, en què el Poder Judicial i el seu òrgan de govern, el Consell General del Poder Judicial, interfereixen en la vida política com un actor més (o fins i tot com un actor determinant), és un imperatiu democràtic.

Aquesta situació s'ha concretat en l'organització en blocs ideològics dels membres del Consell General del Poder Judicial per aconseguir els seus objectius polítics, interferint indugudament en les activitats i competències d'altres òrgans constitucionals, com són les Cortes Generales i els Parlaments autonòmics, que tenen legitimació democràtica directa, vulnerant el principi de la sobirania nacional i el principi de la divisió de poders, cosa que constitueix una veritable subversió de l'ordre constitucional.

La regulació vigent, que permet la continuïtat indefinida dels membres de l'òrgan en funcions i possibilita que se n'impedeixi la renovació d'acord amb les noves majories parlamentàries, n'ha aguditzat la politització i ha posat en evidència la nul·la capacitat dels seus membres per autorrestringir-se davant les iniciatives, pròpies o emanades dels partits polítics o d'altres poders polítics de l'Estat, que comporten baixar a la sorra política.

L'oblit de les responsabilitats dels membres del Consell General del Poder Judicial ha arribat a tal punt que fins i tot s'han organitzat reunions de vocals amb una determinada adscripció ideològica per coordinar-se i desobeir els mandats legals, per exemple, obstruint o alentint el procés de nomenament dels membres del Tribunal Constitucional de manera que no es respectin els terminis previstos a la Llei Orgànica 8/2022, de 27 de juliol, de modificació dels articles 570 bis i 599 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

L'apel·lació d'aquest sector a la insubmissió a la Llei amb l'argument de la independència judicial demostra un menyspreu absolut cap a l'imperi de la Llei i el principi constitucional de la divisió de poders. En un país democràtic, que els membres de l'òrgan de govern dels jutges cridin a la desobediència de la Llei -la màxima expressió de la democràcia, materialitzada per les majories parlamentàries és inacceptable, especialment tenint en compte que la legitimitat dels jutges es fonamenta exclusivament a l'estricta compliment de la llei.

Finalment, cal recordar que la situació de bloqueig no només afecta la qualitat democràtica de les institucions de l'Estat, sinó també, molt particularment, la legitimitat dels qui ostenten els càrrecs no renovats més enllà de la caducitat dels seus mandats respectius, transformant-se en poders autònoms les resolucions dels quals pateixen la falta de legitimitat dels qui les acorden.

### III

Qualsevol situació de bloqueig genera una sèrie de problemes que afecten la qualitat democràtica del funcionament dels poders de l'Estat, però aquests problemes són especialment greus quan l'òrgan objecte del bloqueig és el Consell General del Poder Judicial, tant per la seva naturalesa d'òrgan de govern dels jutges com per les funcions que té constitucionalment assignades. El govern dels jutges, quan es troba en funcions per haver superat el termini màxim de mandat sense que s'hagi produït la deguda renovació dels seus membres, no pot continuar igual que el que actua en període de funcionament normal. Per tant, urgeix l'establiment d'un règim específic per al Consell General del Poder Judicial en funcions, de manera que s'impedeixi que aquesta situació pugui prolongar-se en el temps.

# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 39-1

15 de diciembre de 2023

Pág. 8

L'establiment d'un règim específic per a la situació d'interinitat és coherent amb la naturalesa constitucional del Consell General del Poder Judicial, ja que ni és el Poder Judicial ni és un òrgan que pertany al Poder Judicial, sinó una institució que la Constitució va optar per establir com una garantia més per reforçar la independència i imparcialitat dels jutges, a la qual va atribuir determinades competències perquè aquestes no siguin exercides pel Govern, sense que això impliqui que els jutges disposin de cap mena d'autogovern polític. Segons afirma el Tribunal Constitucional respecte de l'article 122 de la Constitució, «l'únic que resulta d'aquesta regulació és que ha volgut crear un òrgan autònom que exerceixi determinades funcions, l'assumpció de les quals per al Govern podria enterbolir la imatge de la independència judicial, però sense que se'n derivi que aquest òrgan sigui expressió de l'autogovern dels jutges» (STC 108, 1986).

D'acord amb la seva naturalesa i amb les funcions que li atribueix la Constitució («...en particular en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari», article 122.2, però també en relació amb la designació de dos membres del Tribunal Constitucional, article 159.1), al Consell General del Poder Judicial en funcions, orfe de la legitimitat democràtica que ostenta en període normal, no pot ser aplicable el mateix règim jurídic.

### IV

La Constitució espanyola estableix, a l'article 122.3, la durada del mandat dels membres del Consell General del Poder Judicial i, a l'apartat 2 del mateix article fa una remissió expressa a una Llei Orgànica per a la regulació del seu estatut, el règim de incompatibilitats dels seus membres i funcions, en particular en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari.

És, per tant, en el marc d'una Llei orgànica, en aquest cas la ja existent Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, on han d'estar regulades les conseqüències de la finalització del mandat dels seus membres que, per imperatiu constitucional, no es pot prorrogar més enllà dels 5 anys establerts a l'article 122.3 de la Constitució.

Aquesta situació ja va ser abordada en les reformes de derivades de l'aprovació de la Llei Orgànica 4/2013, de 28 de juny, de reforma del Consell General del Poder Judicial, i de la Llei Orgànica 4/2021, de 29 de març, per a l'establiment del règim jurídic aplicable al Consell General del Poder Judicial en funcions, que va introduir a la Llei Orgànica del Poder Judicial un nou article 570 bis amb el propòsit de restringir les facultats relatives a nomenaments atribuïdes amb caràcter general al Consell General del Poder Judicial, una vegada finalitza el termini per a la seva renovació sense que hagin pogut ser designats els nous Vocals.

Tot i això, la simple limitació de les facultats del Consell General del Poder Judicial intentada amb l'aprovació de la Llei Orgànica 4/2021, no només ha resultat insuficient per revertir la situació de bloqueig, sinó que fins i tot s'ha demostrat contraproductiu, com va deixar palesa l'aprovació, en un exercici de discutible coherència legislativa, de la Llei Orgànica 8/2022, de 27 de juliol, que excepcionalment permetent la designació per l'òrgan en funcions dels dos magistrats del Tribunal Constitucional que li correspon per imperatiu constitucional.

Cap d'aquestes reformes s'ha demostrat eficaç per resoldre la situació de bloqueig del Consell General del Poder Judicial. Per tant, cal abordar mesures de més importància que, sense afectar la independència judicial ni l'autonomia del dit òrgan constitucional, permetin donar resposta a una prolongada situació de bloqueig, amb totes les conseqüències que això comporta. En aquest sentit, cal recordar que la independència judicial s'exercita individualment per cada jutge i tribunal en la seva activitat jurisdiccional. És per tant un poder, una facultat i una obligació individual, de la qual no en deriva cap poder o facultat ni per al Poder Judicial ni per al seu òrgan de Govern.

D'acord amb això, per desincentivar el manteniment del bloqueig a la renovació i forçar la sortida de la situació d'extraordinària interinitat en què es troba el Consell General del Poder Judicial, cal preveure el cessament immediat en totes les funcions de tots els



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

## CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 39-1

15 de diciembre de 2023

Pág. 9

membres si el dia de la sessió constitutiva del nou Consell General del Poder Judicial no hi hagués alguna de les Cambres procedit encara a l'elecció dels Vocals la designació dels quals correspongui, sempre que hagi finalitzat el mandat de cinc anys establert a l'article 122.3 de la Constitució. Les prerrogatives inherents dels membres del Consell deixaran de ser aplicable als membres cessats.

Mentre no siguin elegits els nous membres, les funcions estrictament administratives i sancionadores hauran de ser exercides per tres dels membres sortints, que en cap cas podran proposar cap nomenament, ser escoltats pel Govern abans del nomenament del Fiscal General de l'Estat, interposar el conflicte d'atribucions entre òrgans constitucionals de l'Estat, emetre informe als expedients de responsabilitat patrimonial per anormal funcionament de l'Administració de Justícia, ni tampoc elaborar els informes sobre els avantprojectes de llei i les disposicions generals que en virtut del que disposa l'article 561 li corresponguin.

L'establiment d'un règim específic per a la situació d'interinitat que comporta el cessament dels membres caducats i que en limita les funcions a les estrictament administratives i disciplinàries és coherent amb la naturalesa constitucional del Consell General del Poder Judicial: un òrgan no pertanyent al Poder Judicial la raó de la qual és, en definitiva, assumir unes determinades competències que, no podent ser exercides pels mateixos òrgans judicials, de ser exercides pel Govern la independència i imparcialitat dels jutges podria veure's enterbolida, sense que això impliqui que els jutges disposin de cap mena d'autogovern en sentit polític.

Proposició de Llei

Article u. *Modificació de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.*

Es modifica l'article 570, que queda redactat de la manera següent:

«Article 570.

1. Si el dia de la sessió constitutiva del nou Consell General del Poder Judicial no hagués alguna de les Cambres procedit encara a l'elecció dels Vocals la designació dels quals li correspon, i quan hagi finalitzat el mandat de cinc anys establert a l'article 122.3 de la Constitució tots els membres del Consell General del Poder Judicial cessaran immediatament en totes les seves funcions.

2. Cessats que siguin de les seves funcions, deixaran de ser aplicables totes les prerrogatives inherents al càrrec de membre del Consell General del Poder Judicial, inclosa la percepció de la retribució prevista a l'article 584 bis.

3. Mentre no siguin elegits els nous membres del Consell General del Poder Judicial, les funcions estrictament administratives i sancionadores atribuïdes a aquest seran exercides per tres dels membres sortints, que seran el de major i menor edat, així com aquell que s'hagi incorporat en darrer lloc.

4. Des del moment en què finalitza el mandat de cinc anys i fins que hagin assumit el càrrec els nous membres, el Consell General del Poder Judicial, format interinament pels tres membres establerts conforme al sistema previst a l'apartat anterior, no podrà proposar cap nomenament, ser escoltat pel Govern abans del nomenament del Fiscal General de l'Estat, interposar el conflicte d'atribucions entre òrgans constitucionals de l'Estat, emetre informe als expedients de responsabilitat patrimonial per anormal funcionament de l'Administració de Justícia, ni tampoc elaborar-ne els informes sobre els avantprojectes de llei i les disposicions generals que en virtut del que disposa l'article 561 li corresponguin.»

Article dos. *Derogació de l'article 570 bis de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.*

Queda derogat l'article 570 bis de la Llei Orgànica del Poder Judicial.